

LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA BAJO EL GOBIERNO DE REAGAN: DIVERGENCIAS Y AJUSTES PARCIALES*

HERALDO MUÑOZ

INTRODUCCIÓN

LA HISTORIA DE LAS RELACIONES entre América Latina y Estados Unidos revela que éstas nunca han sido plenamente armoniosas ni estables. Incluso con gobiernos dispuestos a estrechar vínculos con Estados Unidos, partiendo del supuesto de la existencia de intereses y perspectivas comunes, la realidad ha demostrado que existen discrepancias básicas respecto de los temas prioritarios de la relación y de cómo enfrentarlos.

En términos generales se puede decir que mientras Estados Unidos siempre ha definido sus relaciones con el resto del continente en función de su seguridad, los países de América Latina han puesto mayor énfasis en sus necesidades de desarrollo socioeconómico, apelando a que las preocupaciones de seguridad deben ir al menos complementadas con un trato más justo en los acuerdos comerciales, financieros y de inversión.

El arribo de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos inició un periodo en que las diferencias con Latinoamérica se ahondaron todavía más. En esencia, el prisma del enfrentamiento Este-Oeste pasó a definir la conducta estadounidense ante cualquier tema de política internacional, reasignando a América Latina el antiguo papel de "patio trasero" para la contención del comunismo.

Desde el momento en que el gobierno de Reagan identificó a Centroamérica como el área crucial para detener la amenaza soviético-cubana, los procesos revolucionarios en la zona fueron definidos como consecuencia directa de una provocación externa proveniente del bloque soviético, y se mantuvo que sólo una enérgica contraofensiva militar podía impedir que la revolución iniciada en Nicaragua se extendie-

* Trabajo presentado en el Simposio Internacional "Relaciones del Perú con Estados Unidos" organizado por CEPEI, Lima, Perú, 26-29 de noviembre de 1986.

se a los países vecinos y que —en una versión de la clásica teoría del dominó— afectara incluso a México y a Estados Unidos. América Central se transformó, desde el punto de vista de la Casa Blanca, en el tema dominante en las relaciones Washington-América Latina. De hecho puede decirse que la política exterior de Estados Unidos se “centroamericanizó”, en tanto que Washington adoptaba una actitud defensiva hacia la región y señalaba a América Latina como la principal fuente externa del problema del consumo de drogas.

El narcotráfico llegó a ser calificado por el gobierno de Reagan como un “problema de seguridad nacional”, que demandaba urgentes medidas de represión policiaco-militar en los países productores: México, Colombia, Bolivia y otros. El prisma Este-Oeste se aplicó asimismo a esta materia, e inclusive la Casa Blanca llegó a utilizar el término “narcoguerrilla” para desacreditar a diversos movimientos rebeldes latinoamericanos y al propio gobierno de Nicaragua, vinculándolos con el tráfico internacional de drogas.

Para América Latina, en cambio, los temas del narcotráfico y el conflicto centroamericano se inscriben en una agenda de relaciones más amplia y diversificada poniendo el énfasis en la búsqueda de soluciones al problema de la deuda externa y en las dificultades que aquejan al comercio exterior de la región. Igual importancia se atribuye al pronto retorno a la democracia en países aún gobernados por regímenes militares, y al estímulo de las condiciones necesarias para que estos procesos democráticos se consoliden donde ya pasó el gobierno a los civiles.

Por último, si bien los países latinoamericanos reconocen la gravedad del conflicto en Centroamérica, tienden a rechazar la lógica de confrontación Este-Oeste que fomenta una solución militar a dicha crisis, y plantean la conveniencia de buscar soluciones políticas y de distensión regional. El problema centroamericano es definido, en último término, como el producto histórico de las condiciones de autoritarismo, corrupción y subdesarrollo que tradicionalmente predominaron en los países del istmo, con la sola excepción de Costa Rica.

Estas visiones contradictorias sobre los temas principales de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se tradujeron en un ostensible deterioro de los lazos interamericanos, particularmente durante los primeros cuatro años de gobierno de Reagan.

Sin embargo, durante 1984 y 1985 Norteamérica enfrentó crisis y situaciones imprevistas y que necesariamente demandaban posturas concretas que trascendiesen el diseño demasiado general y vago de contención del comunismo. Esto puso de manifiesto que el esquema de guerra fría aplicado a América Latina y al Tercer Mundo en general era insu-

ficiente, puesto que encubría enormes vacíos de políticas efectivas para realidades muy complejas, y no respondía a las aspiraciones y urgencias expuestas por los países latinoamericanos.

Es por ello que, como intentaremos demostrar en este trabajo, a partir de los últimos meses de la primera gestión de Reagan, Washington modificó su conducta a fin de obtener un mayor pragmatismo e incorporó algunas de las preocupaciones latinoamericanas en su agenda de política exterior, como el caso de la deuda externa y los procesos de redemocratización. En otras palabras, si bien la lógica de confrontación Este-Oeste sigue orientando la política exterior de Reagan hacia Latinoamérica y el resto del mundo, en la práctica la realidad se ha impuesto sobre la ideología con respecto a América Latina, por lo cual la progresiva falta de comunicación y la tensión entre Washington y los países latinoamericanos se ha detenido. Está por verse, sin embargo, si este proceso seguirá avanzando.

LAS PRIORIDADES DE ESTADOS UNIDOS EN SU RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA: CONTENCIÓN EN CENTROAMÉRICA Y NARCOTRÁFICO

Centroamérica

A partir de enero de 1981 la Casa Blanca lanzó una política agresiva en Centroamérica, proporcionando consejeros, entrenamiento y cuantiosos recursos militares y económicos a los gobiernos que consideraba amigos en el área, y a los contras que combaten en Nicaragua.

La prioridad del gobierno de Reagan fue detener la guerrilla en El Salvador y apuntalar al débil gobierno de Napoleón Duarte. Paralelamente, sin embargo, implantó una política de apoyo y unificación de las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses, tendente a desestabilizar al gobierno sandinista de Managua.

Washington confiaba en que su política respecto de El Salvador y Nicaragua tendría un rápido éxito, pero hacia 1982 estas expectativas se habían desvanecido, debido a lo cual durante los últimos meses de 1982 y primeros de 1983 la estrategia norteamericana adoptó una política más amplia al incorporar otros países de la región.¹ Costa Rica se convirtió en un punto de apoyo político de especial significado, en vir-

¹ Para un análisis de los cambios en la política centroamericana del gobierno de Reagan, ver Luis Maira "Las relaciones Estados Unidos-América Latina" en Heraldo Muñoz (ed.), *Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis-Anuario PROSPEL 1984* (Buenos Aires: GEL, 1985), pp. 411-432.

tud de su legitimidad democrática, y Honduras en la plataforma estratégica para las operaciones militares en la zona: Estados Unidos estableció una base militar en Puerto Castilla, construyó varios aeropuertos e inició ejercicios militares permanentes con tropas norteamericanas y hondureñas. Guatemala, por último, fue un aliado pasivo, manteniéndose la tradicional autonomía relativa de los gobiernos militares guatemaltecos frente a la Casa Blanca.

Sin embargo, esta reorientación de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica tampoco rindió los frutos esperados. Ante esto, en 1984 se pasó a una tercera fase en que se impulsó un plan que intentaba armonizar “objetivos militares y geopolíticos con algunos logros de desarrollo económico y social”.² Para lo cual Reagan designó una Comisión bipartidista sobre política centroamericana, presidida por el ex secretario de Estado Henry Kissinger.

La denominada Comisión Kissinger pretendió elaborar criterios para una política bipartidista con respecto al istmo centroamericano; su principal mérito fue reconocer que las raíces fundamentales de la crisis actual están directamente vinculadas con situaciones de injusticia y autoritarismo de larga data en la mayoría de esos países. Empero, la Comisión no logró imponer un consenso bipartidista y sus recomendaciones concretas, particularmente aquellas que sugerían un incremento en la ayuda económica a la zona, no fueron acogidas.

Como consecuencia, la política de Reagan hacia Centroamérica tendió a distorsionarse, acentuándose preferentemente los aspectos de agresión e intervención.

Washington se negó a reconocer las elecciones nicaragüenses realizadas en noviembre de 1984, y simultáneamente, los cuerpos de inteligencia norteamericanos pasaron de la actividad encubierta al sabotaje directo, entorpeciendo el abastecimiento de combustibles y otros productos básicos al país.

A principios de 1985 Estados Unidos suspendió unilateralmente las conversaciones con Nicaragua que se venían efectuando en Manzanillo, México desde 1984.³ Poco después, el 21 de febrero, el Presidente Reagan declaró en conferencia de prensa que el objetivo de su política era “quitar” al gobierno sandinista. La posibilidad de una negocia-

² *Ibid.*, p. 416.

³ Sobre la política de Estados Unidos hacia Centroamérica durante 1985, ver José Miguel Insulza “Centroamérica y Estados Unidos: 1985”, y Carlos Rico “El proceso de Contadora en 1985: ¿Hasta dónde es posible acomodar las preocupaciones norteamericanas?”, en Heraldo Muñoz (ed.) *América Latina y El Caribe: Políticas exteriores para sobrevivir-Anuario PROSPEL 1985* (Bs. Aires: GEL, 1986).

ción se diluyó aún más al decretarse, en el mes de mayo, un boicot comercial contra Nicaragua. En junio, Reagan afirmó que su país estaba atacando al terrorismo y clasificó a Nicaragua, Cuba, Libia y otros países como “miembros de una confederación de estados terroristas”. A fines de ese año, el secretario de Estado George Shultz se refirió a Nicaragua como un “cáncer” y sostuvo que ese país centroamericano era “prácticamente una base soviética”; al mismo tiempo aplaudió el uso, por parte de los contras, de misiles SAM-7.

A medida que se prolongaba el empate militar en El Salvador, Nicaragua se transformó en el núcleo de atención de la política estadounidense en Centroamérica. Reagan solicitó y obtuvo ayuda para los contras por parte del Congreso, donde, no obstante, se acentuaron las críticas a la política presidencial en relación con Nicaragua. En esencia, sectores importantes del Congreso han manifestado serias dudas acerca de la capacidad de combate de los contras y de la declarada adhesión democrática de su dirección; estiman que la política de agresión estadounidense puede alienar a América Latina y Europa Occidental y fortalecer a los sectores “duros” al interior del gobierno sandinista.

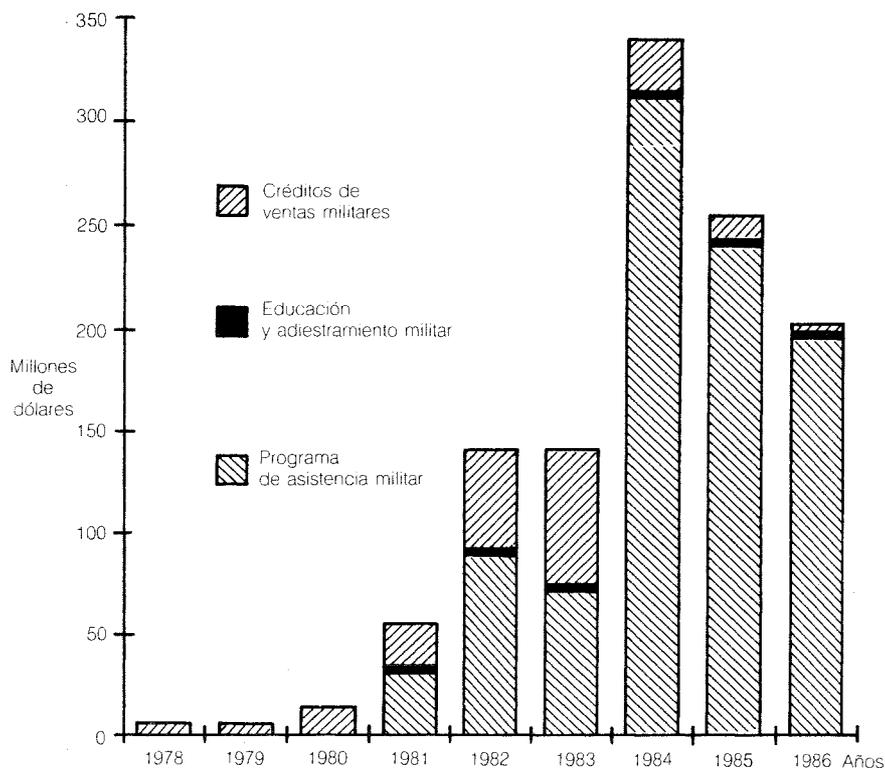
Con todo, en 1985 la Casa Blanca logró que el Congreso aprobara 27 millones de dólares en ayuda “no-letal y humanitaria” para los contras. En 1986, una nueva campaña de Reagan culminó con éxito al obtener la aprobación del Congreso para entregar 100 millones de dólares a los contrarrevolucionarios. De manera simultánea, en los últimos años se ha incrementado notablemente la asistencia militar estadounidense a los gobiernos centroamericanos, con excepción de Nicaragua, de una cifra de alrededor de 50 millones de dólares en 1981 a un monto superior a los 200 millones en 1986.⁴ (Ver cuadro.) El monto total acumulado de la ayuda económica y militar de Washington a Centroamérica entre 1981 y 1986⁵ asciende a 4 700 millones. Por su parte, la Unión Soviética otorgó a Nicaragua ayuda militar del orden de los 300 millones de dólares entre 1981 y 1984;⁶ aunque fuentes del Pentágono sos-

⁴ Sobre la asistencia norteamericana a Centroamérica ver el estudio de Jonathan Sanford “Major Trends in U.S. Foreign Assistance to Central America: 1978-1986”, *Congressional Research Service*, Report núms. 86-88, del 8 de abril 1986. En su programa de ayuda militar a Centroamérica Estados Unidos entregará aviones de combate F-5 a Honduras, con lo cual este país tendrá el material de guerra aéreo más avanzado de la región.

⁵ Ver *U.S. News and World Report*, 24 de marzo de 1986, p. 17.

⁶ Ver Boris Yopo, “La Unión Soviética y la crisis centroamericana: la asistencia militar a Cuba y Nicaragua”, *Documentos de Trabajo PROSPEL*, núm. 6, julio de 1986, p. 24.

Asistencia militar de Estados Unidos a Centroamérica
(en millones de dólares de 1986)



tienen que la asistencia militar soviética sumaría 2 000 millones desde que los sandinistas llegaron al poder en 1979 hasta mediados de 1986.⁷

La cuantiosa ayuda de Washington a los contras —no incluida en las cifras del cuadro— tiene su sustento ideológico en la denominada Doctrina Reagan. En esencia, ésta plantea que Estados Unidos brindará apoyo directo y efectivo a todos los movimientos insurgentes “luchadores por la libertad” que combaten regímenes que la Casa Blanca estima adversos a sus intereses, como, por ejemplo, Nicaragua, Angola y Afganistán.

Cabe preguntarse ahora sobre los cursos de acción que en el futuro emprenderá Reagan con respecto a Nicaragua. Una posibilidad es la

⁷ Ver *International Herald Tribune*, 28-29 de junio de 1986, p. 3.

invasión militar para derrocar al gobierno sandinista; la cual, si bien no puede excluirse del todo, parece en extremo difícil; las encuestas de opinión en Estados Unidos invariablemente han demostrado la clara oposición de los norteamericanos a una intervención armada. Por otra parte, los propios militares estadounidenses no son partidarios de esta opción; están conscientes de que Nicaragua no es Granada, y que los costos de una eventual invasión serían muy altos. Además, los países de la región —particularmente Costa Rica y Guatemala, quien ha retornado a la democracia bajo el gobierno de Vinicio Cerezo— no apoyan esta alternativa, estiman que significaría una guerra abierta entre los estados del istmo.

Otra posibilidad sería la que propone Contadora: un acuerdo político que permitiese la relación de aceptación mutua entre Estados Unidos y Nicaragua. Sin embargo, la práctica de agresión constante impulsada por Washington, descarta este camino al menos mientras dure el gobierno de Reagan.

Una guerra de desgaste, prolongada y extremadamente onerosa para Nicaragua, pero de relativo bajo costo para Estados Unidos sería la tercera opción. Ésta es la que aparentemente domina en la práctica, y que podría continuar durante los últimos dos años de la segunda gestión de Reagan. Pero una guerra de esta índole no se puede prolongar por tiempo indefinido, puesto que al retomar el control mayoritario del Senado el Partido Demócrata, esta posición deberá ser reevaluada. Es probable también que el presidente Reagan se empeñe en proseguir con la guerra de desgaste en lo que resta de su gestión, y que otorgue la oportunidad de tomar una decisión más de fondo sobre Nicaragua al gobierno que le suceda, sea éste republicano o demócrata. Así, Reagan pasaría a la historia como un mandatario firme que en ningún instante depuso la lucha contra el régimen sandinista.

¿Cómo ve América Latina el problema? Para los países de la región la crisis centroamericana tiene profundas raíces socioeconómicas y no se resolverá con una respuesta militar. La mayoría respalda un desenlace político negociado. México, Panamá, Venezuela y Colombia crearon, a principios de 1983, el Grupo de Contadora, cuyo propósito es contribuir activamente a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, independiente de los objetivos estratégicos de Washington.

Desde la óptica latinoamericana, se percibe con preocupación el retorno, por parte de Estados Unidos, a una política del "gran garrote" tendente a restablecer un control hegemónico sobre el continente. Esto explica la declaración conjunta que en 1983 hicieron los presidentes de Brasil y México, condenando la intervención en Centroamérica; y el

rechazo unánime de los países del SELA, Sistema Económico de Latinoamérica (con la sola excepción de Chile que no estuvo presente, pero votó por convocar a una reunión especial sobre el tema), al boicot económico decretado por Estados Unidos contra Nicaragua en mayo de 1985.

A mediados de 1985 se formó el Grupo de Apoyo a Contadora, integrado por Argentina, Uruguay, Brasil y Perú, para dar un nuevo impulso al proyecto original de Contadora, el cual, pese a las múltiples frustraciones que ha enfrentado, continúa siendo "la opción" para América Latina con respecto a Centroamérica. Preservar Contadora significa para los países latinoamericanos contribuir a evitar que la guerra en América Central se extienda y predomine el esquema de confrontación Este-Oeste. La creación del grupo de apoyo representó un punto de convergencia entre la crisis centroamericana y la democratización en Sudamérica, al reconocer implícitamente la conveniencia de favorecer los apoyos mutuos; estimular Contadora en Centroamérica refuerza la concertación política para la paz y reduce así las tensiones externas sobre las frágiles democracias del Cono Sur.

El primer acuerdo de Contadora, propuesto en septiembre de 1984, fue inmediatamente aceptado por Nicaragua, pero recibió objeciones de Costa Rica, El Salvador y Honduras. Una nueva versión apareció a fines de 1985, y esta vez fue Nicaragua quien anunció que no firmaría, a menos que Estados Unidos suscribiera un protocolo especial ~~comprometiéndose a suspender su política de agresión contra Managua~~. El 10 de diciembre de 1985 el gobierno sandinista solicitó un receso de cinco meses en la gestión de Contadora.

Esta crisis pareció aminorarse a raíz de la reunión que tuvieron en Caraballeda el grupo original y el grupo de apoyo, en enero de 1986. En febrero del mismo año los ocho países de Contadora se reunieron con el secretario de Estado norteamericano George Shultz, quien les reiteró su apoyo verbal, pero indicó que Washington no alteraría su política frente a Nicaragua.

Como consecuencia, en los últimos meses de 1986 se observó una situación de estancamiento y empate en Centroamérica: por un lado, Estados Unidos prosiguió con su guerra de desgaste y por otra parte, se registró muy poco avance hacia una solución negociada como la que propugna Contadora. Centroamérica, por tanto, refleja aún las posturas contradictorias que existen entre Estados Unidos y América Latina, respecto de las prioridades y contenidos concretos de las relaciones entre ambas partes.

El narcotráfico

El narcotráfico se ha convertido, desde el punto de vista de Washington, en uno de los temas prioritarios de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La preocupación de Reagan por combatir el tráfico ilegal de estupefacientes se explica por la magnitud que la drogadicción alcanza en su país: se calculan en veinte millones los fumadores de marihuana, de cuatro a ocho millones los que abusan de la cocaína⁸ y en quinientos mil los adictos a la heroína. Norteamérica consume anualmente el 60% de la producción ilegal de drogas en el mundo, y de este total América Latina proporciona el 80% de la marihuana, alrededor del 30% de la heroína y toda la cocaína. En cuanto a las ganancias, se estima que, por ejemplo, la venta ilegal de estos narcóticos produjo cien mil millones de dólares en 1986.⁹

El actual diseño de la política estadounidense de combate al narcotráfico pretende atacarlo tanto por el lado de la demanda interna como por el de la oferta latinoamericana; de ahí que Reagan firmara una directiva presidencial en abril de 1986 calificando el tráfico ilegal de drogas como un "problema de seguridad nacional".¹⁰ Este enfoque ya se evidenciaba en declaraciones oficiales de diversos funcionarios; en febrero de 1986, por ejemplo, el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, Elliot Abrams, había señalado: "pocas de las cuestiones que encaramos en los campos de la política exterior y de seguridad nacional tienen un relieve más grande y más inmediato para el bienestar del pueblo norteamericano que la del tráfico internacional de narcóticos".¹¹

Washington pretende que todos los niveles de la administración pública se involucren en esta lucha. Por lo pronto, cinco embajadas en América Latina cuentan con las recién creadas Unidades de Asistencia de Narcóticos, cuyo objetivo es "alentar, ayudar y canalizar" fondos que Estados Unidos entrega a gobiernos que deseen emprender acciones encaminadas a erradicar el narcotráfico. Con todo, el énfasis de la

⁸ El mercado de la cocaína es uno de los que más han crecido en Estados Unidos. Mientras en 1976 se consumía una cantidad calculada en 18 toneladas, dicha cantidad se elevó a 100 en 1985. Asimismo, se estima que unos 25 millones de norteamericanos han probado alguna vez la cocaína y que cada día 5 000 lo hacen por primera vez. (Ver *Semana*, Colombia, septiembre 2, 1986, p. 26.)

⁹ Ver *U.S. News & World Report*, julio 28, 1986, p. 48.

¹⁰ Esta directiva tuvo carácter secreto hasta que el vicepresidente Bush la hizo pública el 7 de junio de 1986.

¹¹ "Discurso de Elliot Abrams ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York el 10 de febrero de 1986", *Texto oficial*, Servicio de Cultura y Prensa de la Embajada de Estados Unidos, Santiago, febrero 18, 1986, p. 3.

política norteamericana está en los aspectos policiales y represivos. Así, la directiva presidencial introduce el componente militar en dicha política, al permitir utilizar las fuerzas armadas en operaciones punitivas o de control fuera del territorio estadounidense.

Donde más claramente se ha manifestado este enfoque es en Bolivia, país productor de casi el 45% de toda la cocaína que se consume en Estados Unidos. Los primeros días de julio llegó a Bolivia un contingente de 160 militares norteamericanos especialistas en la lucha contra el narcotráfico, provisto de helicópteros, armas y demás medios de comunicación y transporte, cuyo propósito era buscar y destruir laboratorios y fábricas clandestinas de cocaína, en compañía de los "Leopardos", una fuerza militar boliviana entrenada desde 1982 por Estados Unidos en este tipo de combate. En ese momento, Bolivia atravesaba por una agudización de sus problemas económicos y políticos, pues el Congreso norteamericano había acordado retener la ayuda financiera hasta que el gobierno andino cumpliera un convenio anterior para reducir el total de la superficie destinada al cultivo de la coca. La oposición interna a Paz Estensoro incrementó sus ataques alegando la inconstitucionalidad del arribo de soldados extranjeros al país, y los campesinos se movilizaron, inquietos ante las incursiones de los militares.¹² Todo esto tornó más oscuro el panorama político boliviano, sin que se alcanzaran los resultados deseados.

Otro problema con respecto al narcotráfico es la tendencia de Reagan a inscribir casi todos los asuntos de las relaciones con América Latina en el marco del conflicto Este-Oeste. La Casa Blanca ha buscado establecer vínculos entre los narcotraficantes y los movimientos "terroristas" (entendidos como aquellos grupos insurreccionales latinoamericanos de izquierda), y en particular, entre el narcotráfico y Nicaragua. Así, el nuevo discurso norteamericano habla de una "conexión mortífera entre los traficantes de narcóticos y los grupos terroristas guerrilleros".¹³

No obstante, la evidencia para sostener esta declaración es sólo circunstancial. Se acusa a los guerrilleros de proteger a los narcotraficantes, y a éstos de financiar a aquéllos. Lo que sí se da es una confluencia y superposición territorial de las dos actividades, ya que ambas requie-

¹² En septiembre, Washington concedió a Bolivia un crédito puente por 100 millones de dólares, destinado a paliar los graves daños causados a la economía boliviana por la lucha contra el narcotráfico, con el compromiso de que se devuelvan cuando La Paz reciba un préstamo de contingencia *Stand by* del Fondo Monetario Internacional (Ver *Cable IPS*, La Paz, septiembre 16, 1986).

¹³ Elliot Abrams, *op. cit.*, p. 7.

ren de “espacios vacíos” alejados de las leyes y de la acción punitiva del Estado.¹⁴ De esta forma, resulta posible que una maniobra emprendida en la selva peruana contra traficantes, termine enfrentada con bandas guerrilleras, y viceversa. Pero hasta el momento no se ha podido establecer fehacientemente un vínculo entre guerrilleros y narcotraficantes.

Ronald Reagan llegó a sostener, en un discurso pronunciado en marzo de 1986, que altos dirigentes sandinistas estaban profundamente involucrados en el tráfico de drogas. Sin embargo, dos días después, la *Drug Enforcement Agency* (DEA), agencia gubernamental encargada de la investigación y represión del tráfico de drogas, se vio en la necesidad de aclarar públicamente que “no existía evidencia alguna para respaldar las acusaciones del presidente Reagan”.¹⁵ Irónicamente, sí se ha evidenciado una relación entre los contras y el narcotráfico; la propia Casa Blanca, en respuesta a investigaciones del Congreso, reconoció que “algunos rebeldes anti-sandinistas pueden haber estado efectivamente involucrados en actividades de narcotráfico” durante un periodo de 18 meses previo a junio de 1985, lapso durante el cual —según el ejecutivo norteamericano— los contras “necesitaban apoyo financiero en forma urgente”.¹⁶

Existen, sin duda, vínculos entre el narcotráfico y el mundo de la política en general, pero no tienen que ver con la ideología, sino con la corrupción. Así, por ejemplo, es bien conocida la estrecha alianza que hubo entre el régimen del general García Meza en Bolivia y el narcotráfico; el arresto y condena en Estados Unidos del ex primer ministro de las Islas Turcas y Caicos, Norman Saunders, por estar involucrado en el negocio ilícito de drogas, y la denuncia formulada en 1975 por Samuel Hoyos, entonces ministro de justicia de Colombia, en el sentido de que en su país “guardias de aduana, jueces, magistrados y hasta sacerdotes son cómplices del tráfico internacional de estupefacientes”.¹⁷ Cabe recordar que el ministro de Justicia colombiano Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por narcotraficantes en abril de 1985, y que entre 1981 y esa fecha, los mismos contaban ya entre sus víctimas a 22 jueces y seis magistrados. En Bolivia y México se han reportado tam-

¹⁴ Esta opinión es sostenida por Fernando Bustamante “La política del narcotráfico. Prioridades y limitaciones del enfoque estadounidense”, *Cono Sur*, vol. V, núm. 4, agosto-septiembre, 1986, pp. 1-4.

¹⁵ Ver *Time*, 31 de marzo, 1986, p. 7.

¹⁶ Ver *International Herald Tribune*, 18 de abril, 1986, p. 2.

¹⁷ Citado en “Efectos políticos del terror del narcotráfico”, *Clarín*, Buenos Aires, 12 de noviembre, 1986, p. 41.

bién muertes relacionadas con el tráfico de drogas.

En consecuencia, resulta ingenuo —desde la perspectiva latinoamericana— que Reagan intente situar una relación entre narcotráfico y terrorismo en un contexto de lucha Este-Oeste, ya que así desconoce que tanto el narcotráfico como la insurrección revolucionaria responden, en último término, a complejas causas de origen estructural en las sociedades de América Latina.

Según la óptica latinoamericana, uno de los puntos más débiles del enfoque de la Casa Blanca estriba en el hecho de que el cultivo de la coca tiene un fuerte arraigo socio-cultural en los pueblos andinos y, más importante aún, que para los empobrecidos campesinos la demanda creada por el narcotráfico significa una verdadera bonanza en sus ingresos. De ahí que todos los esfuerzos por erradicar la siembra de coca destinada a producir droga requieran de importantes inversiones, tanto en términos educacionales como para el desarrollo e introducción de otros cultivos que produzcan ganancias igualmente atractivas para los agricultores. Esto último parece muy difícil, si se toman en cuenta los enormes rendimientos que genera la producción de coca.

En este sentido es importante destacar que mientras un campesino boliviano productor de coca para el narcotráfico obtiene aproximadamente 7 000 dólares anuales por hectárea, el ingreso per cápita oficial de Bolivia es de 350 dólares, en tanto que el promedio de los sueldos del sector público sólo es de 50 dólares mensuales y el salario mínimo apenas sobrepasa los veinte. Cabe señalar, asimismo, que la participación directa e indirecta en actividades ligadas con el narcotráfico se está convirtiendo en un veloz mecanismo de ascenso social.

Pese a que la mayor parte de los ingresos derivados del narcotráfico no se quedan en los países productores, sus residuos bastan para crear verdaderas economías paralelas que trastornan las estructuras y actividades económicas latinoamericanas. Al incrementarse los ingresos de sectores hasta entonces marginales, aumentan la demanda y los precios, desencadenando procesos inflacionarios a veces incontrolables. Algo similar sucede en los mercados de divisas y con los tipos de cambio oficiales, que resultan distorsionados por el comercio ilegal de moneda extranjera, es decir por el surgimiento de amplios mercados negros de dólares.

En mayor o menor medida, lo anterior es válido para todos los países latinoamericanos donde se producen ilegalmente drogas. Pero, entre ellos Bolivia destaca como un caso extremo. Se calcula que en ese país la exportación ilegal de coca y cocaína reditúa alrededor de 600 millones de dólares, cifra que representa el doble de lo que se obtiene

por exportaciones legítimas, y que supera en 250 millones el presupuesto público calculado para 1987.¹⁸

La colaboración estadounidense respecto de la erradicación del narcotráfico es vista por los países latinoamericanos como altamente insuficiente, pues pretende obtener resultados positivos y rápidos con un mínimo aporte de recursos económicos. De hecho, los mayores ofrecimientos norteamericanos continúan siendo la asistencia militar en armas, equipo y entrenamiento; recién está comenzando el debate acerca de aumentar la ayuda económica destinada a financiar programas de exterminio y sustitución de cultivos, y de educación y desarrollo en las áreas donde se produce coca o marihuana.

Por último, los países latinoamericanos sostienen que no han permanecido indiferentes ante el tráfico ilegal de narcóticos. Colombia y Brasil firmaron en 1977 un convenio de asistencia recíproca sobre narcotráfico, reactualizado en 1986, que coordina el combate y la represión de esta actividad en el plano bilateral. Colombia y Perú igualmente han llevado a cabo acciones policiaco-militares conjuntas en sus áreas fronterizas. En el caso particular de Colombia, durante el pasado gobierno de Belisario Betancur, se realizaron importantes esfuerzos por eliminar la producción ilegal de drogas.

En Ecuador, al asumir la presidencia León Febres Cordero en agosto de 1984, éste firmó la Declaración de Quito, documento que define el tráfico y el consumo de drogas como un crimen contra la humanidad. Desde ese momento la erradicación del narcotráfico se convirtió en una de las metas prioritarias del gobierno ecuatoriano.

En Perú, el régimen de Alan García emprendió desde sus primeros días una fuerte lucha contra el narcotráfico, que abarcó desde una limpieza de los organismos policiales, hasta el empleo de las fuerzas armadas en amplias campañas de represión en zonas selváticas. Fueron destituidos numerosos oficiales acusados de corrupción relacionada con el tráfico de drogas, y se destruyeron enclaves, pistas de aterrizaje y laboratorios de traficantes; paralelamente, el gobierno peruano ha iniciado un programa de sustitución de cultivos.¹⁹ Manteniendo su postura in-

¹⁸ Ver "Drugs Threaten Security", *Latin American Monitor-Security* (Special Survey), Londres, 1986, p. 54.

¹⁹ Desde que asumió la presidencia Alan García, el gobierno peruano ha capturado 22 aeropuertos, 3 campos de aterrizaje de helicópteros, 5 aviones, 8 fábricas y gran cantidad de drogas. Además está desarrollando un programa para remplazar el cultivo ilegal de coca con cultivos para producir aceite y polvo de chocolate y mantequilla de cacao. Ver "Perú: Talks on Antidrug Schemes" en *Latin American Monitor-Security*, *op. cit.*, p. 59.

dependiente y no alineada, Alan García rechazó el ofrecimiento norteamericano de enviar tropas para ayudar a combatir a los narcotraficantes.

México es otro país importante en la red de productores de drogas, que ha realizado considerables esfuerzos en contra del narcotráfico. Sin embargo, reiteradamente aparecen denuncias de que tolera esta actividad y que algunos funcionarios gubernamentales están implicados en ella. Este es un tema muy delicado en la relación bilateral entre México y Estados Unidos; en agosto de 1986, durante el encuentro en Washington de los mandatarios de ambos países surgieron, sin embargo, felicitaciones y apoyos mutuos por la lucha contra el tráfico de drogas.

Cabe destacar también la reunión que realizaron a fines de abril de 1986 en Río de Janeiro los países integrantes del sistema interamericano, destinada a convenir formas conjuntas para combatir la producción y el tráfico de drogas en el continente. Se acordó organizar un banco de datos sobre el narcotráfico en América Latina, y crear una comisión permanente para combatirlo. Por otra parte, la más reciente muestra de la preocupación de Reagan en torno a la materia fue la convocatoria, a mediados de noviembre de 1986, a una reunión en Washington con 17 embajadores norteamericanos en Europa, Asia, y especialmente América Latina; en ella estuvieron presentes la primera dama Nancy Reagan, el vicepresidente George Bush, el secretario de Estado George Shultz, y otros altos funcionarios. Por último, es importante mencionar que el vice-presidente de Bolivia, Julio Garrett-Aillon, propuso ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1986, atacar el tráfico ilegal de cocaína mediante la creación de un fondo económico internacional que compraría las hojas de coca a los agricultores, estableciendo así un sistema mundial de control de la materia prima sin dañar la economía de los campesinos. Los aportes al fondo serían fundamentalmente por parte de los países consumidores de la droga.²⁰

En resumen, la posición de América Latina con respecto al narcotráfico es bastante más amplia y compleja que la de Washington: aunque entiende que es una cuestión apremiante, piensa que la solución debe tener en cuenta las raíces profundas del problema y no centrar todo el esfuerzo únicamente en la represión. Desde la perspectiva latinoamericana, en la medida en que al análisis que hace la Casa Blanca no se incorporen variables de tipo socio-económico como las ya descritas,

²⁰ Ver "Bolivia: Cocaine Plan Offered to U.N.", *Latin American Monitor-Security*, *ibid.*, p. 58.

un mayor esfuerzo policiaco-militar, sea directo o bajo la forma de ayuda y cooperación, no asegura que se elimine definitivamente la producción de drogas. A lo más, se obtendrá una baja en los niveles de producción y exportación sólo mientras los narcotraficantes se trasladan hacia áreas más seguras. Por último, algunos gobiernos latinoamericanos sostienen que el énfasis no debe ponerse en el tráfico de estupefacientes, sino en el consumo, ya que en muchos países desarrollados es tolerado por las autoridades. La demanda en este caso, crea su propia oferta, lo que, según el planteamiento latinoamericano significa que Estados Unidos y los países industrializados en general tienen una responsabilidad fundamental respecto de este problema.

LAS PRIORIDADES DE AMÉRICA LATINA EN SU RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS: DEUDA EXTERNA Y DEMOCRACIA

Desde la perspectiva estadounidense, los problemas fundamentales de la relación con América Latina son la crisis centroamericana y el narcotráfico. Para América Latina, en cambio, los asuntos más urgentes en las relaciones interamericanas tienen que ver con la deuda externa y el retorno y consolidación de la democracia.

De acuerdo con la opinión de los países latinoamericanos, el gobierno de Reagan ha ignorado las implicaciones de seguridad que tiene el problema de la deuda externa. Los problemas económicos de América Latina, según Reagan, se resolverán mediante la aplicación de esquemas librecambistas, la "magia del mercado", el incremento de la inversión extranjera y el aumento de las exportaciones. Además, el presidente norteamericano ha sostenido que la clave para mejorar la economía mundial en general, y la de los países subdesarrollados en particular, está en el crecimiento y bienestar de la economía de Estados Unidos.

Por este motivo, el gobierno norteamericano transformó a la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en un instrumento para promover la empresa privada, y expandió los programas de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) y de la Corporación Financiera Internacional (IFC), dos entidades cuyo propósito es estimular la inversión privada en el Tercer Mundo. En el plano comercial, Reagan restringió las actividades del EXIMBANK, por considerarla una entidad distorsionadora del comercio libre, y trató de limitar la práctica de otros países desarrollados en cuanto a otorgar préstamos subsidiados para las exportaciones.

En América Latina la presión social ha ido agudizándose en países

estratégicos como Brasil, México, Argentina y Perú, debido a la pesada carga que les impone el servicio de enormes deudas con el exterior, la fluctuación a niveles muy elevados de las tasas de interés, la crisis recesiva mundial y la caída de los precios de sus exportaciones. La presión social, asimismo, se refleja en aquellos países que han vuelto recientemente a un sistema de gobierno democrático, poniendo en peligro el futuro de estos procesos políticos. Los presidentes democráticos de países como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Perú han formulado dramáticas declaraciones acerca de los costos sociales que entraña el servicio de la deuda. De allí que hayan llamado a la búsqueda de respuestas regionales al problema —formando para este propósito el Consenso de Cartagena—, e instado a los estados acreedores a participar en un esfuerzo común para encontrar soluciones razonables a la crisis.

En 1986 la deuda externa latinoamericana ascendió a 370 mil millones de dólares, cifra excepcional en la historia de la región.²¹ Sólo cuatro naciones lograron en 1985 tasas de crecimiento per cápita positivas (Brasil, México, Cuba y Paraguay), mientras el desempleo y la inflación tendieron a aumentar; ese año, a nivel regional, el producto per cápita declinó 1.5% respecto a 1984.

Debido fundamentalmente al pago de intereses sobre la deuda, durante 1985 la región transfirió al exterior 30 mil millones de dólares, éxodo que aumenta a 102 mil millones si se toma el periodo 1982 a 1985, y que representa casi un 6% del producto total de la región en esos años, o el doble de los gastos de reconstrucción de posguerra en Alemania durante la década de 1920. Cabe agregar que a principios de 1986 casi el 40% de los ingresos latinoamericanos provenientes de las exportaciones se destinaba al pago de intereses. Esta situación prevalece frente a un creciente proteccionismo en Estados Unidos y otros países desarrollados, y a una baja en la inversión extranjera directa en América Latina.

Para colmo, en 1985 el valor de las exportaciones de la región cayó en un 6% con relación al año anterior, debido a lo cual los términos de intercambio para Latinoamérica han experimentado un deterioro acumulado del orden del 16% desde 1980. América Latina, entonces, ha perdido toda una década de esfuerzos en aras del desarrollo por lo que se ha llegado a sostener que la región “corre el riesgo de ser más pobre

²¹ Para un análisis de las cifras de la deuda externa y las relaciones económicas internacionales de América Latina, ver “Balance preliminar de la economía latinoamericana: 1985”, *Notas sobre la economía y el desarrollo*, CEPAL, núms. 424-425, diciembre de 1985.

en el siglo XXI de lo que ha sido en el presente, si no se corrigen los desequilibrios y se eliminan las restricciones que la deuda externa impone a las economías de la región".²²

Este panorama crítico de la deuda externa latinoamericana ha provocado una creciente movilización política tendente a buscar fórmulas para superar tan grave situación. Durante 1985 el Consenso de Cartagena citó a dos reuniones, una en Santo Domingo y la segunda en Montevideo, donde se discutieron planteamientos comunes que podrían adoptar los países de la región frente al FMI y el Banco Mundial, y la conveniencia de estimular un diálogo político con los estados acreedores.

Por otra parte, a fines de julio de 1985, Cuba convocó a una conferencia sobre deuda externa, a la que asistieron líderes políticos, académicos y algunos representantes de gobiernos latinoamericanos y caribeños. En este encuentro, Fidel Castro declaró que la deuda externa de la región era imposible de pagar bajo las condiciones dadas y que, en esencia, debía ser absorbida por los países desarrollados mediante un esquema de reactivación de la economía mundial que contemplara la creación de un nuevo orden económico internacional. En octubre de ese mismo año, el Parlamento Latinoamericano realizó a su vez una reunión en Montevideo sobre la deuda externa regional; en ella se destacó el estrecho vínculo que existe entre el logro de condiciones adecuadas para el pago de la deuda y la preservación de la paz social y la democracia en América Latina. Henry Kissinger, en un artículo publicado en el *Washington Post*, habló de la necesidad de un programa similar al Plan Marshall para solucionar la crisis de la deuda latinoamericana, y advirtió sobre una eventual desestabilización económica y política en los países deudores si la situación no cambiaba.²³

Por último, cabe señalar que en Perú el peso de la deuda externa llevó al gobierno de Alan García a establecer un límite al pago de intereses, equivalente al 10% del valor de las exportaciones, y a rechazar la intermediación del FMI en la renegociación con la banca extranjera.

El gobierno de Reagan, entretanto, durante todo su primer periodo sostuvo que la deuda externa de América Latina sólo se podía resolver siguiendo la lógica de las fuerzas del mercado, el fomento de las exportaciones y el estímulo a la inversión extranjera privada. Frente a esta

²² Miguel Rodríguez Mendoza "Deuda externa, acción conjunta de América Latina y estrategias de negociación" en Heraldo Muñoz (ed.) *América Latina y El Caribe*, *op. cit.*, p. 505.

²³ Ver Henry Kissinger "Building a Bridge of Hope to our Latin Neighbors", *The Washington Post*, 25 de julio, 1985, p.15.

actitud los países latinoamericanos insistieron en que la supervivencia de regímenes estables y democráticos peligraba a causa del problema de la deuda externa regional; y señalaron además que existen implicaciones para el sistema financiero internacional y para la banca privada norteamericana, ya que si bien existe disposición de la mayor parte de las naciones deudoras para pagar, se está llegando a un punto en que será casi imposible hacerlo.

La preocupación de Latinoamérica se refiere a que aun cuando los países de la región pueden terminar pagando sus deudas —incluso si no se modifican sustancialmente las condiciones actuales de pago mediante la imposición de políticas draconianas a sus pueblos—, corren el riesgo de que se produzcan desde asaltos a supermercados, hasta saqueos y trastornos sociales y políticos generalizados. En el Cono Sur, particularmente, es posible que esto conduzca a la intervención militar y al colapso de regímenes democráticos; en definitiva, “la victoria financiera podría ser alcanzada al precio de una eventual derrota política”.²⁴

La deuda externa es un tema prioritario en la agenda de seguridad de los países de América Latina, sobre todo en aquellos que como Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala, Perú y Bolivia, entre otros, han retornado recientemente al sistema democrático de gobierno. Para estos países la democracia no es solamente un valor en sí mismo, sino un recurso legitimador que tiende a fortalecer los esfuerzos para la cooperación y las negociaciones con estados desarrollados.

A este respecto cabe mencionar el acuerdo firmado en julio de 1986 entre los gobiernos democráticos de Argentina y Brasil, para iniciar un Programa de Integración y Cooperación Económica. El programa —que incluye 12 protocolos referentes a la cooperación en asuntos tales como bienes de capital, comercio, empresas binacionales, energía, biotecnología, prevención de accidentes nucleares y aeronáutica— enfatiza el propósito común de consolidar la democracia como sistema de vida y de gobierno; de hecho, los presidentes Alfonsín y Sarney declararon que un requisito básico para la participación de otras naciones sería su condición de “países con gobiernos democráticos”.²⁵ Por lo pronto, Uruguay ya ha sido invitado a participar en este programa de cooperación.

²⁴ Riordan Roett, “Democracy and Debt in South America: A Continent’s Dilemma”, *Foreign Affairs*, núm. 62, 1983, p. 702.

²⁵ Sobre el acuerdo Brasil-Argentina ver *El Mercurio*, 31 de julio, 1986, pp. A1-A8.

EL AJUSTE RELATIVO DE LA POLÍTICA LATINOAMERICANA DE
ESTADOS UNIDOS DURANTE LA SEGUNDA GESTIÓN DE REAGAN

Como ya hemos señalado, a fines del primer periodo presidencial de Reagan y continuando durante el segundo, la posición de Washington frente a América Latina experimentó algunos ajustes en función de un mayor realismo. El esquema de guerra fría aplicado a América Latina demostró su insuficiencia, como, por ejemplo, en el caso de la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña.

En consecuencia, Estados Unidos ha reconocido la gravedad del problema de la deuda y modificado su enfoque eminentemente técnico en favor de una perspectiva más política. Durante la asamblea conjunta del FMI y el Banco Mundial en octubre de 1985 en Seúl, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, James Baker, propuso un plan de tres puntos para enfrentar la problemática de la deuda consistente en: a) que los bancos privados se comprometieran a conceder 20 mil millones de dólares en tres años; b) los países deudores establecieran políticas macroeconómicas y estructurales para fomentar el crecimiento, y c) aumentar los préstamos del Banco Mundial y los organismos multilaterales de desarrollo en un 50% encima de los niveles actuales (5 900 millones), entre 1986 y 1988.²⁶ El plan, señaló Baker, no modificaba el enfoque estadounidense de abordar el problema de la deuda de manera individual, caso por caso.

La respuesta de los países latinoamericanos fue poco entusiasta. Empero, se reconoció que el Plan Baker era un avance ya que, por primera vez, Estados Unidos incluía el tema de la deuda en su agenda de política exterior y le prestaba atención política. El Consenso de Cartagena sostuvo que el Plan era insuficiente, pues si se llegaba a poner en práctica, América Latina podría esperar recursos financieros adicionales sólo por un monto de ocho a nueve mil millones de dólares al año, cifra que no alcanzaría a cubrir ni la cuarta parte de los pagos que la región debe realizar anualmente por concepto de intereses.²⁷ En el fondo, por tanto, el problema de la deuda externa latinoamericana sigue vigente.

Un segundo cambio en la política exterior de Reagan se ha registrado en relación con el tema de los derechos humanos y los procesos de democratización. Este presidente criticó duramente el énfasis en los derechos humanos y la democracia de la política exterior durante el gobierno de Carter, argumentando que tal "énfasis moralista" había ero-

²⁶ Ver reportaje en *El Mercurio*, 9 de octubre, 1985, pp. B1 y B2.

²⁷ Ver Miguel Rodríguez Mendoza, *op. cit.*, p. 516.

sionado los intereses estratégicos de Estados Unidos, especialmente en los casos de Nicaragua e Irán. La puesta en práctica de la “diplomacia silenciosa” que propugnaba la embajadora Jeane Kirkpatrick, sobre la base de su conocida distinción entre regímenes autoritarios y totalitarios, se transformó en una luz verde para el aumento de la represión desde Haití y El Salvador hasta Chile y Corea del Sur. En su primera conferencia de prensa, el secretario de Estado Alexander Haig anunció que el terrorismo internacional remplazaría a los derechos humanos como preocupación fundamental de la política exterior norteamericana.

Sin embargo, como lo demuestra el artículo de Tamar Jacoby publicado en *Foreign Affairs*,²⁸ el Congreso norteamericano y los grupos a favor de los derechos humanos en Estados Unidos se opusieron a la política de Reagan en esta materia, y lograron imponer requisitos como las “certificaciones” sobre derechos humanos para aquellos países que aspiraban a recibir ayuda militar de Washington. Como consecuencia, ya hacia fines de 1981 circulaba en el Departamento de Estado un memorándum confidencial en el que se afirmaba que el tema de los derechos humanos tenía una importancia central en la política exterior estadounidense.

Jacoby sostiene que el gobierno de Reagan abandonó entonces su esfuerzo por borrar de su agenda de política exterior el tema de los derechos humanos, y en cambio, trató de “cooptar la idea y utilizarla para sus propios fines geopolíticos”; es decir, la defensa de los derechos humanos y la democracia volvían a adquirir relevancia, pero ahora como un instrumento para hacer frente a regímenes de orientación comunista u hostiles a Estados Unidos. Según el mismo autor, el propio presidente Reagan se sintió más satisfecho con la nueva postura moralista pero fuertemente anti-comunista, que con la “fría y calculadora doctrina Kirkpatrick”.²⁹

El nuevo énfasis en los derechos humanos debía ser compatible con los intereses geopolíticos más trascendentes de Washington. En los casos de Haití, Filipinas y Chile Reagan percibió que promover la defensa de los derechos humanos convenía a los intereses estratégicos norteamericanos, y empezó a presionar, aunque con cautela, por un cambio efectivo hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos fundamentales. A este proceso de revisión de la política estadounidense hacia Latinoamérica, contribuyó también la crítica que hacía el Congreso por

²⁸ Tamar Jacoby, “The Reagan Turnaround on Human Rights”, *Foreign Affairs*, vol. 64, núm. 5, 1986, pp. 1066-1086.

²⁹ *Ibid.*, p. 1.071.

la inconsistencia que representaba mantener, por un lado, una postura de agresión abierta hacia el gobierno sandinista de Nicaragua y, por otro, una actitud de tolerancia con respecto a los regímenes militares de derecha.

En América Latina este giro en la política estadounidense se vio favorecido al disminuir el predominio de regímenes militares y aumentar el número de gobiernos civiles democráticos que gozan de gran legitimidad internacional y considerable apoyo interno.

Para terminar, si bien se ha dado un acercamiento de percepciones y posiciones entre Estados Unidos y América Latina en lo que se refiere a la deuda externa, la democracia y los derechos humanos, aún persisten profundas diferencias respecto de la crisis centroamericana y en relación con el narcotráfico, particularmente en cuanto a las formas de enfrentar dichos problemas.

NOTAS FINALES

En este trabajo se afirma que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina bajo las dos gestiones presidenciales de Reagan, particularmente durante la primera, se han caracterizado por un aumento en las discrepancias y tensiones históricas entre ambas partes.

Las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos continúan, aunque a partir del segundo periodo presidencial de Reagan, han amornado como producto de los ajustes que ha debido hacer la Casa Blanca para enfrentar realidades internacionales muy complejas, y por ende difíciles de manejar con un diseño demasiado general y vago de contención del comunismo. Por consiguiente, en determinados aspectos de las relaciones interamericanas la realidad ha terminado por imponerse sobre la ideología en la política exterior de Reagan.

Estos ajustes —que en ningún caso alteran la lógica subyacente de confrontación Este-Oeste— han sido duramente criticados por la derecha. Así, por ejemplo, en el reportaje “Terminators” de Jerry Sanders,³⁰ figuras representativas de los sectores más derechistas de Washington, como Edward Luttwak y Ray Cline, critican el supuesto retorno de Reagan a la política de *détente*, y postulan que la invasión a Granada resulta insuficiente como expresión de la voluntad anticomunista de la Casa Blanca y debiera extenderse sin rodeos a Nicaragua. Siguiendo

³⁰ Ver el artículo de Jerry Sanders, “Terminators”, *Mother Jones*, agosto-septiembre de 1985, pp. 36-41.

esta línea, Norman Podhoretz ha expresado su desencanto con los cambios en la política exterior de Reagan ya que podrían reflejar un divorcio entre retórica y acción y, en definitiva, apuntarían a retomar el curso pro-*détente* que había asumido la política exterior norteamericana a partir de 1972.³¹

En suma, la orientación geopolítica global de Reagan continúa, aunque complementada con algunos ajustes que le han servido para abordar ciertos casos concretos en los que la ideología anticomunista no ofrece posibilidades de acción reales y efectivas; pero las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos persisten. Un desafío para el futuro será crear nuevos y más fluidos canales de diálogo y negociación entre ambas partes, a fin de incrementar los lazos de cooperación mutua en aquellos aspectos donde haya afinidades, así como para manejar los conflictos de intereses que existen y existirán entre Estados Unidos y América Latina.

³¹ Ver Norman Podhoretz, "Foreign Policy under Reagan: The Reagan road to Détente", *Foreign Affairs*, vol. 63, núm. 3, pp. 447-464.